

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral promovido por CARMEN RUBIELA MOSQUERA ASPRILLA en contra de INVERSIONES BATARÁ S.A.S., JOMIS S.A.S., PROMOCIONES BALTICA S.A.S. y AMORINI S.A.S. (Radicado 05001-31-05-008-2020-00051-01).

ANTECEDENTES

Pretende la demandante que se declare que entre ella y las demandadas se llevó a cabo un contrato de trabajo de manera verbal y a término indefinido entre el 1° de enero de 1995 y el 30 de enero de 2019, el cual fue terminado por parte de las empresas demandadas de manera unilateral, ilegal y sin justa causa en la última de las datas y, en consecuencia, se les condene a reconocerle y pagarle cesantías por todo el tiempo; intereses a las cesantías; indemnización por despido unilateral, ilegal y sin justa causa de conformidad con el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo; sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; sanción moratoria por no entregar las dotaciones de calzado y vestido de labor por todo el tiempo; las cotizaciones al sistema de

seguridad social integral y/o en subsidio, el cálculo actuarial correspondiente; las cotizaciones a la Caja de Compensación Familiar; el pago de los subsidios familiares; la indexación sobre las sumas reconocidas; y las costas.

En sustento de esos pedimentos narró que fue contratada por el señor John Dyner Rezonzew para laborar en sus 4 empresas: Inversiones Batará S.A.S, Jomis S.A.S., Promociones Báltica S.A.S. y Amorini S.A.S., mediante contrato de trabajo verbal a término indefinido el 1° de enero de 1991 (sic) para desempeñar el cargo de oficios varios; el horario de trabajo fue el de tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes de 7:30 a.m. a las 5:30 p.m.; la labor la prestaba para las cuatro empresas en las mismas instalaciones donde estaban todas las oficinas, es decir, en un mismo espacio físico, realizando labores de limpieza general, barrer, trapear, servir tintos, agua, estar pendiente del cafetín y atender a los visitantes a las oficinas; la remuneración mensual por su labor diaria equivalía al salario mínimo legal vigente para cada año hasta el 2015, y a partir del 2016 se le pagó por cada día de trabajo la suma de \$35.000 hasta el momento de su desvinculación, pagaderos de manera semanal y en efectivo, sin que se le haya dado recibo o algún tipo de colilla; pese al cargo y funciones en las empresas, no le cancelaron nunca sus cesantías ni tampoco se las consignaron en un fondo autorizado por la ley para ello, ni los intereses a las cesantías, tampoco el calzado y vestido de labor, ni fue afiliada a la seguridad social integral ni a una Caja de Compensación Familiar; el señor John Dyner Rezonzew en su calidad de propietario de las empresas decidió dar por terminado el contrato de trabajo el 30 de enero de 2019, indicándole al medio día que ya no la necesitaba más y sin darle explicaciones le manifestó que ya no volviera más, configurándose el despido unilateral, ilegal y sin justa causa; el propietario de las empresas la citó el 8 de febrero de 2019 con el fin de entregarle la liquidación de prestaciones sociales, pero se negó a recibirla porque consideró que era muy inferior a lo que legalmente le correspondía; la citó para una segunda oportunidad el 12 de febrero siguiente para que se presentara en el término de cinco días a fin de entregarle la liquidación definitiva de prestaciones sociales, la cual recibió; pese a lo anterior, lo cierto es que el propietario de los establecimientos le hizo una liquidación a todas luces contraria a derecho y por sus 24 años y un mes

de servicio, tan solo se le dio una liquidación de \$19.754.233, sin que hubiera incluido las sanciones monetarias a que habían lugar; el 27 de marzo de 2019 radicó ante el señor John Dyner Rezonzew, en calidad de propietario de las empresas demandadas, un derecho de petición pretendiendo la corrección y revisión de la liquidación definitiva de las prestaciones sociales, el que fue atendido mediante comunicación del 10 de abril de 2019, en la que le indicó que una vez revisada la liquidación no había arrojado suma pendiente en su favor.

La sociedad Amorini S.A.S. atendió de manera oportuna el libelo oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, indicando que la misma solo se constituyó a partir del 30 de enero de 2001, por lo que al no existir no era posible ninguna contratación, por lo que negó todos los hechos de la demanda. Como excepciones formuló las de no relación laboral entre Amorini S.A.S. y la demandante; cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación; temeridad y mala fe de la demandante, prescripción de los intereses sobre las cesantías, de la indemnización moratoria por no consignar las cesantías, de las vacaciones y de las primas de servicio.

La sociedad Promociones Báltica S.A.S., dio respuesta de manera oportuna a la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Negó los hechos relativos a la relación laboral. De los demás dijo que no le constaban. Propuso como excepciones las que denominó: inexistencia del contrato laboral entre las partes, no prestación personal del servicio por parte de la demandante, temeridad, mala fe, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de causa para demandar, prescripción, caducidad, prescripción de los intereses sobre las cesantías, de la indemnización moratoria por no consignar las cesantías, de las vacaciones y de las primas de servicio.

Jomis S.A.S. dio respuesta igualmente de manera oportuna al libelo, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. En los mismos términos de las otras sociedades negó los hechos, en el sentido que con la demandante no se presentó ningún tipo de relación laboral. Formuló como excepciones las

de no relación laboral entre las partes, no prestación personal del servicio por la demandante, temeridad, mala fe, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de causa para demandar, prescripción y caducidad, prescripción de la indemnización moratoria por no consignar las cesantías, de las vacaciones y de las primas de servicio.

Inversiones Batará S.A.S, atendió en término la presente acción, oponiéndose igualmente a la prosperidad de las pretensiones. Señaló que esta fue constituida el 10 de diciembre de 2010, y que no suscribió contrato laboral con la accionante. Aceptó que la señora Mosquera iba a las instalaciones de la sociedad cada 3 meses, según su disponibilidad y los días que ella pudiese y solo para el aseo de los ventanales de la oficina por cuanto es un piso entero y resulta compleja su limpieza, a más del piso de madera de la oficina, teniendo en cuenta que debe ser mediante un procedimiento con cera para pulirlo. Indicó que las sociedades accionadas no conforman ningún grupo empresarial, por lo que son contable y socialmente independientes. Como excepciones propuso las de no existencia de relación laboral, contrato de prestación de servicios con la demandante, temeridad, mala fe, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, prescripción de los intereses sobre las cesantías, de la indemnización moratoria por no consignar las cesantías, de las vacaciones y de las primas de servicios.

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 17 de febrero de 2023, ABSOLVIÓ a las sociedades INVERSIONES BATARÁ S.A.S., JOMIS S.A.S., PROMOCIONES BÁLTICA S.A.S. y AMORINI S.A.S., de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora CARMEN RUBIELA MOSQUERA ASPRILLA, a quien le impuso las costas fijándole como agencias en derecho la suma de \$500.000 a favor de las codemandadas a prorrata.

Inconforme con la decisión, interpuso el recurso de apelación el apoderado de la parte accionante, a quien le fue concedido. Como argumentos expuso que en el de marras si se presentó un contrato de trabajo y no de prestación de

servicios como lo dedujo la juez de instancia. Indica que, si bien la liquidación que se allegó al plenario no tiene ninguna firma, la información allí contenida coincide exactamente con los hechos de la demanda, a más que detalla quienes fungen como empleadores de la demandante. Indica que ese documento se debe acompasar con el fechado en febrero de 2019, en el que el señor John Dyner, en calidad de representante legal de la sociedad Jomis S.A.S. y con dirección que coincide con la que obra en el certificado de Cámara y Comercio de esa entidad, refiere que resulta extraño que el representante legal de esa sociedad no sepa que en el mismo espacio de ellos funcione Amorini S.A.S. Señala que analizando los certificados de cámaras de comercio, resulta evidente que la dirección de domicilio de las sociedades es la misma, exceptuando Jomis S.A.S., así como la dirección de correo electrónico de notificación judicial de Inversiones Batará S.A.S. y Promociones Báltica S.A.S., es el mismo, contabilidad@jomisgroup.com y el de Amorini S.A.S. y Jomis S.A.S., es el mismo, jomis@une.net.co, por lo que si Jomis no tiene nada que ver con las otras sociedades, que tiene que estar haciendo sus correos electrónicos como notificación judicial. Agrega que el señor John Dyner aparece como gerente de Inversiones Batará S.A.S., aparece en el primer renglón de la junta directiva de Jomis S.A.S., aparece como gerente de Báltica S.A.S., y aparece como gerente suplente de Amorini S.A.S., entonces pretender hacer creer que este señor no tiene nada que ver con todas las empresas solo porque Jomis tiene una dirección distinta., no es aceptable. Manifiesta que lo que se esperaba era que el despacho empezara a unir los cabos sueltos y los indicios que existían en el plenario, como lo es que al responder el derecho de petición de la accionante frente a la corrección de su liquidación, el señor John Diyner firma como gerente de todas las sociedades, refiriendo que al juzgado le faltó profundizar las inconsistencias en los interrogatorios frente a la documental aportada, solicitando que a través de los indicios se puede establecer que la demandante tenía un contrato laboral con las empresas demandadas, por lo que se condene de manera conjunta o solidaria todos los pedimentos esgrimidos en la demanda.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Atendiendo la materia objeto de apelación, el problema jurídico a definir en esta oportunidad por esta Sala de Decisión orbita en determinar si entre la demandante y las sociedades convocadas, existió o no un contrato de trabajo, en el que la demandante tuvo la calidad de trabajadora, y en caso positivo, si procede la condena de los emolumentos laborales pedidos.

En torno al contexto, cabe rememorar que como es bien sabido, existen reglas claras y precisas que las partes deben y tienen que cumplir o propender porque se cumplan, si aspiran a que sus peticiones sean reconocidas. Entre las más relevantes deben traerse a colación las establecidas en los artículos 164 y 167 del C.G. del P. (Ley 1564 de 2012) aplicables por analogía al procedimiento laboral, las mismas que consagran el principio de la necesidad de la prueba y la regla de la carga de la prueba, respectivamente.

Por lo demás, es también del caso recordar que conforme al mandato del artículo 61 del C. P. del T. y de la S. S., los jueces de instancia forman libremente su convencimiento, dentro de un marco básico conformado por los principios científicos que informan la crítica probatoria, las circunstancias relevantes del proceso y la conducta procesal de las partes, tal como en infinidad de oportunidades lo ha dicho y reiterado la jurisprudencia laboral.

En coherencia con los requisitos que regula el artículo 23 del CST para que se configure una relación de índole laboral, el artículo 24 de la misma normatividad sustancial consagra la presunción legal de que toda prestación de servicio está regida por un contrato de trabajo, presunción que le traslada al convocado como empleador a desvirtuarla y probar en contrario, ora demostrando la ausencia de remuneración, o la inexistencia de la

subordinación o dependencia jurídico laboral. El propósito de este mandato es darle eficacia al carácter tuitivo o protector de las normas del derecho al trabajo frente a los trabajadores, pero sin que ello implique el relevo de la carga probatoria que le asiste a la parte promotora del juicio en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso.

En el asunto, la parte actora allega como material probatorio un formato de *“LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO PROMOCIONES BAL TICA SAS, INVERSIONES BATARA SAS, JOMIS SAS, AMORINI SAS Y JHON DYNER R.”*, sin ninguna firma ni reconocimiento por parte de quienes supuestamente la emitieron. Así mismo, aparece una comunicación suscrita por el señor John Dyner Rezonzew dirigida a la aquí demandante con fecha del 10 de abril de 2019, en respuesta a una solicitud que ésta le elevara frente a una diferencia con una liquidación, sin que de ella se pueda extractar la existencia de una relación de carácter laboral, pues tal concepto, de manera autónoma, no implica relación laboral, por lo que tales documentos por sí solos no tienen la eficacia probatoria que se busca. A más de ello, la actora presentó como probanzas los certificados de existencia y representación legal de las sociedades accionadas, tratando de encausar mediante la vinculación del representante legal de varias de ellas con todas, dejando de lado que los elementos esenciales para este tipo de procesos son los descritos por la norma, y que si bien puede existir una prestación del servicio de aseo, no quedó demostrado de forma clara para quien lo prestaba ni la manera en que lo prestó.

En ese orden, claramente existía un servicio prestado por el demandante, pero a juicio de esta Sala de Decisión era de suyo dar cuenta que así ocurrió para el servicio de quienes son demandados, pues no existe prueba fehaciente de ese hecho para dar cabida certera a la activación de la presunción del mencionado artículo 24 del CST, por lo que la promotora de la acción debió acreditar en este escenario los requisitos que regula el artículo 23 del CST para que se entienda configurada una relación de índole laboral.

De otro lado, la actora no trajo al proceso ningún testigo que diera cuenta de sus hechos, que señalara aspectos que llevaran al convencimiento a la judicatura de la prestación personal del servicio de manera subordinada con el consecuente pago de un salario, pues solo sustentó lo expuesto en la demanda con sus propios dichos que, como es bien sabido, los mismos solo sirven como declaración de parte según lo señalado por el artículo 191 del Código General del Proceso y valorada por el juez “...*de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas*”.

Por otro lado, al momento de contestar la demanda, la sociedad Inversiones Batará S.A.S. allegó como prueba documental, sendos comprobantes de egreso en los que se relacionan como concepto la cancelación de cuentas de cobro presentadas por la señora Carmen Rubiela Mosquera Asprilla por el aseo en el inmueble ubicado en la carrera 43 A No. 16 sur 47 piso 6°, con fechas del 24 de marzo de 2017, 21 de junio de 2017, 22 de septiembre de 2017, 20 de diciembre de 2017, 20 de marzo de 2018, 22 de junio de 2018 y 21 de diciembre de 2018, sin que de ellos se pueda extraer un contrato de trabajo, desde una relación con dependencia y sometimiento al cumplimiento de órdenes y horario e imposición de labores en cuanto al modo, tiempo o cantidad.

No desconoce esta Sala de Decisión la situación presentada en cuanto a que entre algunas de las sociedades se relacionan en el certificado de existencia y representación legal las mismas direcciones o líneas telefónicas, pero que tal situación serviría como indicio para deducir un grupo empresarial, más no para concluir la existencia de una relación laboral, por cuanto son otros los elementos que se deben de acreditar para alcanzar este último fin.

Clarificado lo anterior, en efecto, para esta Sala a partir de los principios de la sana crítica lo que se logra probar con las probanzas arrojadas al proceso es que el vínculo que pudo haber existido entre las partes fue uno que no tiene carácter laboral, en tanto la señora Carmen Rubiela Mosquera Asprilla no logró demostrar el ejercicio de una labor subordinada, en la que se demuestre su sujeción a la parte accionada en calidad de trabajadora, más bien quedó

demostrada el desarrollo de un oficio libre, encontrando esta Sala de Decisión Laboral en esta oportunidad improbadamente la relación de trabajo que se atribuye y que conlleva en definitiva, a que la decisión revisada sea confirmada.

Conforme lo pregona el artículo 365-3 del CGP las costas en esta instancia estarán a cargo de la parte demandante, fijándose las agencias en derecho en la suma de medio salario mínimo legal mensual.

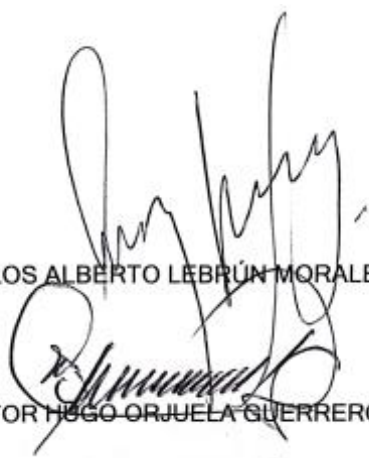
DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas.

Las costas de esta instancia a cargo de la parte actora y en favor de las demandadas, fijándole como agencias en derecho la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310500820200005101
Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: CARMEN RUBIELA MOSQUERA ASPRILLA
Demandado: AMORINI S.A.S.
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 12/12/2023
Decisión: CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 13/12/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario